

Dirección General de Administración del Congreso (segunda instancia).

2. La continuidad del administrado Juan Augusto Erasmo Mariátegui Malarin al Régimen Pensionario del DL 20530, ya estaba consumado desde antes de las Leyes restrictivas del DL 20530, las Leyes Nros 28389 y 28449, del año 2004, lo cual nunca estuvo en duda para los funcionarios del Congreso, desde su calificación en el régimen pensionario del DL 20530, en julio del 2006. Ante tales hechos jurídicos, los funcionarios que laboraron para las presidencias de los periodos 2011-2012 y 2012-2013, han emitido resoluciones contradictorias y ajenas al Derecho, lo cual evidencia un perjuicio durante 20 meses, respecto del reconocimiento del legítimo derecho pensionario del aludido administrado.
3. Se pone en evidencia que habría dos criterios en relación a tales solicitudes por parte del Congreso de la República, referentes al régimen pensionable de los Congresistas dentro del DL 20530, durante las presidencias de estos dos últimos períodos parlamentarios. **Ab initio**, el reconocimiento del derecho pensionario con el respeto de la normatividad y garantía Constitucional para los siete (07) casos similares, luego que terminaron sus funciones. **Contrario sensu** y con los mismos fundamentos, pero con interpretaciones erróneas, para el ex Parlamentario Andino quien viene esperando 20 meses, a pesar de estar en la misma situación jurídica que sus otros colegas Congresistas, con mayor similitud con: Reymundo, Mayorga, León Zapata y Rebaza.
4. La Presidencia del Congreso debería investigar esta situación **sui generis** en perjuicio del Dr. Juan Mariátegui, en tanto son sus propios funcionarios quienes habrían sustentado tales fundamentos **ab re** como se evidencia en las interpretaciones erróneas de las normas que analizamos. Salvaguardando responsabilidades, se podrían establecer las responsabilidades individuales que correspondan.
5. Por todo lo expuesto, conforme a los vigentes principios establecidos en el Digesto, **ius est ars boni et aequi** y **ius et ut**, se debe reconocer sus cinco años congresales dentro del DL 20530, para los efectos de acumulación de tiempo de servicios prestados al Estado, al ex